

1987

POSIBILIDADES EDUCATIVO-LABORALES DE LA JUVENTUD CHILENA.

UN ANTECEDENTE PARA PLANIFICAR LA FORMACION PROFESIONAL

Luis Eduardo González

Salomón Magendzo

NOTA: Los antecedentes que se presentan en este trabajo fueron recopilados dentro de un proyecto de seguimiento a jóvenes de sectores populares que realizan ambos autores en el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) y financiado por el International Development Research Centre (IDRC).

La consideración de una estrategia tripartita en la formación para el trabajo en la cual participen los trabajadores, los empresarios y el Estado está, en gran medida, condicionada por el contexto social, político y económico que se da en un determinado país. De este contexto surgen los criterios con los cuales cada sector define sus intereses y su ingerencia en la formación. De ahí que consideremos pertinente dar cuenta de la realidad chilena, antes de presentar algunas opciones de capacitación.

En primer lugar nos referimos a algunos antecedentes del desarrollo económico de Chile y de la participación de los distintos agentes, en segundo lugar presentamos la realidad de la juventud, posteriormente nos referimos a algunas alternativas de educación y de formación para el trabajo, en cuarto término nos referimos al problema del desempleo juvenil para concluir con un comentario general sobre los antecedentes presentados.

1. Antecedentes sobre la participación del Estado, los trabajadores y los empresarios en el desarrollo económico de Chile. (1)

A comienzos de este siglo, la economía chilena basaba su desarrollo en la producción agrícola principalmente para el consumo interno y la exportación de minerales, en especial nitratos, que permitían importar otros bienes para el consumo de los sectores de mayores ingresos.

La crisis mundial de los años 30 disminuyó la disponibilidad de bienes en el mercado internacional y redujo el poder comprador externo. La carencia de bienes y divisas obligó al país a iniciar un proceso de industrialización para sustituir importaciones. Se mantuvo, sin embargo, el carácter del país monoexportador de productos minerales, pero, la invención del salitre artificial convirtió al cobre en el principal producto de exportación. Con ello, la economía chilena continuó siendo vulnerable y dependiente de algunos mercados internacionales.

El proceso de industrialización generó una serie de cambios importantes en la estructura social y productiva del país de los cuales vale la pena destacar algunos.

En primer lugar, se produjo una heterogeneidad de la estructura productiva. Un pequeño grupo de empresarios más dinámicos montó algunas empresas tecnologizadas y de alta eficiencia en lo que se ha denominado el sector moderno de la economía; por otra parte, se mantuvo una amplia gama de empresas con producción tradicional.

En segundo término, este proceso de industrialización contribuyó al despoblamiento de sectores rurales y a la concentración de la población en grandes ciudades. Es así como del 44% de los chilenos que vivían en el campo en 1907 sólo el 17,8% permanecía en zonas rurales en 1982, a pesar de que la tasa de natalidad ha sido mayor en dichas zonas.

El desarrollo industrial y la concentración urbana dinamizó también a diversos sectores sociales. Se produjo una mayor organización de los trabajadores, se facilitó el acceso a los servicios públicos, y aumentaron los niveles de escolarización y participación política, en especial de las capas medias de la población.

El estado, hacia los años 40, controlado por los gobiernos de clases medias, se comprometió más en la gestión económica del país y asumió una ingerencia directa en la

construcción de infraestructura e industria pesada (energía, hidrocarburos, comunicaciones y transporte).

La participación directa del Estado en los distintos sectores de la economía continuó aumentando hasta comienzos de los años 70. Además, paulatinamente, se fue incrementando la participación política de los sectores populares, los cuales a su vez fueron incrementando su escolaridad.

A comienzos de los años 60 se inició el proceso de reforma agraria que discontinuó el sistema de producción tradicional en el campo. El Estado expropió los grandes predios y los distribuyó entre los campesinos, o formó asentamientos provisionales, mientras capacitaba a los trabajadores agrícolas quienes, posteriormente, debieran haberlos recibido. Para ello desarrolló organismos especializados de Formación y Asesoría como la Corporación de Reforma Agraria, el Servicio Agrícola Ganadero y el Instituto de Desarrollo Agropecuario.

El proceso de estatización se incrementó hasta 1973. En ese entonces, el Estado llegó a controlar 507 de las principales empresas y organismos financieros del país, sobre un total de alrededor de diez mil, incluyendo las sociedades

anónimas y de responsabilidad limitada. El Estado, además, pasó a constituirse en un importante empleador primando, muchas veces, un criterio de beneficio social por sobre la eficiencia económica directa para las contrataciones.

El proceso de industrialización, por la vía indirecta, estimuló un incremento de la demanda de mano de obra en otros sectores de la economía, especialmente en comercio, transporte y comunicaciones, construcción, y servicios (Ver Cuadro 1). El sector industrial, sin embargo, disminuyó levemente su aporte relativo al producto interno bruto (Ver Cuadro 2) y tampoco aumentó la demanda de empleo en la misma proporción que otros sectores, debido a la tecnologización del sector moderno. En efecto, en los últimos veinte años cada trabajador del sector industrial al igual que aquellos de los sectores mineros, de la electricidad, gas y agua, y de los servicios, han sido más eficientes -en términos puramente económicos- que los trabajadores del sector agrícola, comercio o transporte (Ver Cuadro 3).

El desarrollo económico basado en la industrialización sustitutiva y el crecimiento del sector moderno fue generando, en forma paralela, un sector informal de la economía, centrado en una economía de subsistencia y de trabaja-

dores que en forma independiente realizaban actividades de baja productividad. Al sector informal acudieron muchos emigrantes rurales de baja escolaridad que vivían en las ciudades en condiciones muy precarias; pero también se incorporó una cantidad importante de trabajadores por cuenta propia (comerciantes, mecánicos, electricistas, etc.) cuyos ingresos en promedio superaban el de los asalariados (obreros ocupados en las empresas o servicios). Los trabajadores por cuenta propia llegaron a constituir la quinta parte de la fuerza laboral en 1970, y se ha mantenido con leves variaciones hasta la fecha (Ver Cuadro 4).

Toda la composición de la fuerza laboral chilena se ha ido transformando en los últimos veinticinco años, probablemente debido a los requerimientos de mayor tecnologización de algunos sectores y al aumento de los niveles educacionales. Es así como se ha duplicado el número de empleadores; ha aumentado levemente la proporción de personas que trabajan en empresas familiares sin remuneración; ha disminuido el porcentaje de obreros y ha crecido la proporción de empleados de tal modo que supera levemente la proporción de obreros (Ver Cuadro 4). Esta última situación, que no siempre se refleja en mayores ingresos, obedece probablemente a una presión de sectores populares con mayor educación que

busca empleos de mejor status social.

Como consecuencia de todo este proceso, se ha generado una segmentación del mercado ocupacional. Ello significa que, personas con similar educación o del mismo sexo obtienen ingresos muy disímiles dependiendo del "segmento laboral" en el cual trabajan.

Como producto de esta segmentación, los sectores más pobres han devenido en una situación desmejorada, estimándose que a lo menos un quinto de la población del país vive en condiciones paupérrimas (2).

El producto bruto anual por habitante en Chile alcanzó a US\$ 897 en 1983 (3); sin embargo su distribuciones heterogénea para los distintos niveles sociales. Es así como el 20% de la población con mayores ingresos tenía un nivel de consumo de 51% por sobre el consumo promedio total del país, mientras que el grupo que estaba en el quintil de menores ingresos sólo consumía el 5,2%. Es decir, diez veces menos, como se puede observar en el cuadro 5.

El modelo de desarrollo articulado en el crecimiento del sector moderno y en la concentración del capital en manos de

los empresarios más eficientes se debilitó, en parte, con el gobierno Demócrata Cristiano (1964-70) que fortaleció la organización sindical, legisló en favor de los asalariados e impulsó un incremento de la participación de los trabajadores en la gestión política y económica del país. Sin embargo con la instauración del gobierno militar en 1973 vuelve con más auge el modelo de modernización, apoyado en una ideología neo-liberal. Los empresarios asumen con mayor fuerza la conducción económica. El Estado toma un rol subsidiario y los trabajadores no tienen prácticamente ningún acceso a las decisiones.

La vulnerabilidad externa de la economía chilena hizo que la crisis mundial del petróleo de mediados de la década del setenta, afectara fuertemente al proyecto neo-liberal. A lo anterior, se sumaron las condiciones sociales y políticas internas y los graves problemas con países limítrofes que generaron un gasto importante en armamento, mientras que la inversión productiva fue escasa.

La segunda crisis de comienzos de los ochenta afectó aún más la economía chilena. En Julio de 1983 el déficit de la balanza de pagos alcanzó a mil siete millones de dólares y la deuda externa acumulada superó los veinte mil millones de

dólares. Eso significaba que en una economía débil como la chilena cada ciudadano debería ahorrar alrededor de dos mil dólares para lograr cancelarla.

El endeudamiento interno, provocado por la crisis y por una deficiente administración financiera, alcanzó también cifras comprometedoras. Es así como las deudas impagas en bancos y financieras llegaron a superar en un 136% el capital y las reservas de todas las instituciones financieras del país.

Por otra parte, el modelo económico, entre cuyas prioridades inmediatas no está la generación de empleo sino la acumulación de capital entre los empresarios del sector moderno y la saturación del Estado como empleador, generó una crisis sustantiva del mercado laboral. La cesantía abierta alcanzaba al 17,8% de fuerza laboral en 1983, sin considerar el 14,8% de la población económicamente activa adscrita a los programas estatales para absorber cesantía (Programa de Empleo Mínimo, PEM, y Programa de Ocupación para Jefes de Hogares, POHJ, con un ingreso inferior a US\$ 20.- mensuales). Se concluye entonces que prácticamente uno de cada tres chilenos con interés de trabajo no ha podido hacerlo.

La crisis ha afectado en forma diferente a los distintos niveles ocupacionales. Los que más se han empobrecido han sido los obreros y los trabajadores por cuenta propia, es decir, los sectores más pobres, los que aún no recuperan el poder adquisitivo que tenían en 1973 (Ver Cuadro 6). En cambio los empleadores han incrementado sus ingresos en un 52% con respecto al mismo año acrecentando así la distancia entre los más ricos que acumulan capital y los más pobres que se proletarizan, lo cual es consecuente con el modelo neo-liberal. Ello por cierto ha afectado las relaciones entre empresarios, trabajadores y el Estado.

La crisis también ha afectado en forma distinta a personas con diferente nivel educacional. Pero curiosamente el impacto ha sido mayor para quienes tienen educación secundaria, los que han perdido aproximadamente un 20% del poder adquisitivo que tenían en el año 1973. (Ver Cuadro 7).

El contexto del desarrollo económico chileno muestra cómo ha variado la participación de los diversos agentes: empresarios, trabajadores y Estado, y cómo se crean intereses diferentes de estos agentes que afectan a sus interrelaciones y a los supuestos subyacentes en las políticas de formación de recursos humanos.

2. Antecedentes sobre la actividad de los jóvenes en Chile.

En Chile los jóvenes, como grupo etario de 15 a 24 años, son 2.374.736 personas (Ver Cuadro 8). Ellos constituyen un quinto de la población total del país.

Al analizar la realidad de los jóvenes podríamos distinguir dos etapas: la adolescencia que se extendería en términos muy generales hasta los 19 años y la pre-adulterez que incluye hasta los 24 años. A continuación veremos los antecedentes de los jóvenes que están fuera y dentro de la fuerza laboral.

a) Antecedentes sobre los jóvenes que están

fuera de la fuerza laboral.

La gran mayoría de los jóvenes de 15 a 19 años no ha ingresado a la fuerza laboral (79%), tendencia que es más fuerte en los sectores urbanos en donde alcanza al 82%. (Ver Cuadro 9).

En general las tasas de escolaridad han subido notablemente en el país. El 85% de los jóvenes de sectores urbanos

entre 15 y 19 años que no está en la fuerza laboral está estudiando en la educación formal o no formal (4) y aún el 42% entre 20 y 24 años permanece en esa actividad (Ver Cuadro 10). Si bien la proporción es mayor en sectores medios o altos también es importante en sectores populares. Los jóvenes entre 15 y 19 años que estudian se concentran en la enseñanza media (74%) (Ver Cuadro 11). En cambio, los de 20-24 años se concentran en la educación terciaria, en especial universitaria.

Dentro de los que están fuera de la fuerza laboral, en el grupo etario de 20 a 24 años, la proporción que realiza quehaceres domésticos es mayor en áreas rurales, alcanzando a 80% en dichas áreas y a un 48% para el sector urbano. No sabemos cuántos jóvenes asumen voluntariamente este rol doméstico (desempleo voluntario) o es el resultado de patrones culturales, o bien es simplemente la carencia de oportunidades para realizar un trabajo remunerado.

b) Jóvenes que están en la fuerza laboral.

En cuanto a los jóvenes que están dentro de la fuerza laboral hay un total de 269.600 entre 15 y 19 años y otros 680.700 entre 20 y 24 años que están trabajando o buscando

empleo (Ver Cuadro 12). En el grupo más joven un 17% está buscando trabajo y un 13% está cesante, sin incluir entre ellos a quienes están en programas estatales de absorción de la cesantía (PEM y POJH) constituidos en gran medida por jóvenes. Entre los mayores (20-24 años) un 11% está buscando trabajo por primera vez y el 17% está cesante. Tenemos así un total de 269.800 jóvenes de 15 a 24 años desocupados, y que probablemente en su mayoría pertenece a sectores de bajos ingresos.

Entre los jóvenes ocupados, sólo el 44% de los varones y el 56% de las mujeres tiene jornada de trabajo completa entre los 15 y 24 años y esta proporción no sube demasiado para el grupo de 20 a 24 años (Ver Cuadro 13). Este sub-empleo invisible, viene a confirmar la verdadera dimensión del problema laboral de los jóvenes, lo que influye en la tendencia histórica a postergar el ingreso a la fuerza laboral.

Una síntesis del tipo de actividad que realizan los jóvenes, tanto para el grupo etario de 15 a 19 años como para el de 20 a 24 años, la presentamos en el gráfico 1.

3. Educación y formación para el trabajo.

El crecimiento brusco de las tasas de escolaridad a partir de mediados de los años 60, ha derivado en una masificación de la educación media, con el consiguiente deterioro de ésta como mecanismo de movilidad social. Por otra parte, los cambios en la estructura ocupacional han hecho proletarianizarse las ocupaciones de clase media, de tal modo que para ser empleado se exige más educación, pero los ingresos reeditados no son necesariamente mayores que los de un obrero. La educación ha pasado a constituir un factor necesario, pero no suficiente para la movilidad social. De esta manera, se ha comenzado a formar un "cuello de botella" en la estructura ocupacional, debido a que la expansión del sistema educativo no ha sido coherente con transformaciones en otras esferas económicas, políticas y sociales. En términos más concretos, podríamos decir que en Chile se planificó una extensión del sistema educativo formal pensando que en el mediano plazo se produciría un cambio en la estructura social. Este cambio finalmente se ha postergado, mientras que el sistema educativo ha continuado con cierta inercia expansionista. Ello ha provocado desajustes con el modelo económico actual para el cual la redistribución del ingreso y del bienestar social es una meta de largo plazo,

que se alcanza como consecuencia del crecimiento del capital. De ahí que para los economistas neo-liberales el pueblo está técnicamente sobreeducado.

a) La Educación formal para el trabajo.

La educación post-secundaria que está directamente relacionada con el trabajo ha tenido importantes transformaciones en Chile a partir de la década de los 80. El gobierno estableció tres categorías de instituciones tomando como criterio una escala de prestigio de las carreras que ellas impartían. En la primera categoría quedaron las universidades; éstas imparten las carreras consideradas de mayor prestigio: Agronomía, Arquitectura, Bioquímica, Ingeniería, Leyes, Medicina, Odontología, Psicología, Química y Farmacia, Veterinaria y los programas de post-grado, Maestría y Doctorado. En la segunda categoría quedaron los Institutos Profesionales que sólo pueden impartir carreras generalmente de cuatro años de duración, y que eran consideradas de menor prestigio tales como: Antropología, Pedagogía, Periodismo, Sociología, etc. En tercer nivel están los Centros de Formación Técnica que imparten carreras cortas, de aproximadamente dos años de duración, tales como: Decoración, Programación, Secretariado, Tecnología Médica, etc. Estos

Centros son considerados post-secundarios, pero no forman parte de la Educación Superior.

Junto con reorganizar el sistema post-secundario se permitió la creación de establecimientos privados y se subió drásticamente el valor de la matrícula. Es así como de las ocho grandes universidades existentes en el país en la década del setenta, se pasó a tener 20 universidades más pequeñas, 24 Institutos Profesionales y 96 Centros de Formación Técnica (5). Por otra parte, estas 8 Universidades eran prácticamente financiadas por el Estado, siendo el precio de sus matrículas prácticamente gratuito. En cambio hoy día oscila entre US\$50.- y US\$200.- mensuales (6). Se permite sí, la posibilidad de obtener crédito fiscal para el caso de las universidades estatales. De esta forma, frente a la presión social por continuar estudios post-secundarios, las autoridades respondieron con una expansión estratificada y autofinanciada del sistema. Solución que va en deterioro de las aspiraciones de los jóvenes de sectores populares y beneficia a las familias de mayores recursos que pueden financiar la educación de sus hijos.

Los cambios que han ocurrido en la educación post-secundaria chilena durante la década de los ochenta, es posible

que hayan alterado el proceso de transición de los estudiantes entre los niveles secundario y terciario. En concreto para los 99.146 estudiantes que terminaron su cuarto año medio en 1983 se ofrecían 72.554 vacantes en la educación post-secundaria, de las cuales 40.265 correspondían a la educación superior, como podemos observar en el Cuadro 14. De las 72.554 vacantes ofrecidas en 1983, un 25% no tuvieron postulantes, cifra que aumentó el año siguiente y que se ha mantenido igualmente alta con posterioridad. Estas vacantes sin llenar se produjeron especialmente en los Centros de Formación Técnica que ofrecen carreras de dos años.

Frente a los datos que nos muestran una posibilidad de transición estratificada pero bastante fluida entre la educación secundaria y terciaria (siete de cada nueve egresados podrían continuar estudiando) debemos plantearnos dos condicionantes que atañen principalmente a los sectores populares: En primer lugar, el costo de la matrícula que es bastante difícil de cubrir para las familias más pobres. En segundo término por la situación de los rezagados que son jóvenes de estrato medio alto quienes, durante un año o más se preparan a través de cursos propedéuticos para postular en mejores condiciones a la educación superior. (Ver Cuadro 15).

Estos antecedentes muestran que la formación para el trabajo a nivel postsecundario no es un problema de capacidad del sistema, sino un problema de estratificación social dentro del modelo de desarrollo neo-liberal, en el cual el Estado da atención preferencial a los sectores empresariales.

Ante la dificultad de ingresar a la educación superior los jóvenes provenientes de sectores populares muestran una mayor preferencia por la educación media con la modalidad técnico-profesional como una forma de prepararse para el trabajo (7). De esta manera, con un menor costo-oportunidad por estar estudiando, los alumnos adquieren los elementos básicos para desempeñarse en un oficio. La modalidad técnico-profesional llegó a constituir en 1973 el 36,6% de la matrícula total de la educación media (8). Sin embargo, para la actual estructura social chilena el mercado ocupacional ha comenzado a saturarse en diversos oficios (9), lo que sumado al mayor costo de la educación media técnica ha redundado en una decisión gubernamental de privatizar los establecimientos, disminuir la matrícula y reducir la duración de los estudios, limitándolos a los dos últimos grados de la educación secundaria.

Queda con ello en evidencia la percepción de un pueblo

sobreeducado para los planificadores de una economía neo-liberal.

El traspaso de las escuelas técnicas del Estado a grupos empresariales ha tenido repercusiones positivas en el sentido de una mayor vinculación de lo educacional y lo productivo. Sin embargo, se crea un alto riesgo de servilismo al estar ausente la comunidad y los trabajadores.

b) La educación no formal para el trabajo.

Dentro de la educación no formal también se han producido cambios importantes en el país, los cuales se han dado en los tres niveles que usualmente se consideran en la educación no formal para el trabajo: la capacitación y el perfeccionamiento profesional estructurado; los programas de aprendizaje y la educación popular.

La capacitación y el perfeccionamiento profesional estructurado, que constituyó uno de los ejes fundamentales de la promoción de los trabajadores en gobiernos anteriores se encuentra hoy muy disminuida.

Los grandes organismos técnicos, de carácter estatal

dedicado a la formación profesional se han cerrado (en especial en el agro: INDAP, CORA, ICIRA) o están principalmente centrados en la educación formal postsecundaria (INACAP, DUOC). Dentro del modelo de economía neo-liberal esto se explica por la saturación del mercado ocupacional debido a la sobreoferta de mano de obra calificada. Por otra parte, el sector moderno de la economía requiere de personas con una sólida formación general que puedan adecuarse en corto tiempo a un puesto de trabajo altamente especializado el que, muchas veces, preparan los propios vendedores de equipos.

La formación de mano de obra se ha canalizado entonces a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) que se organiza mediante dos tipos de actividades: el Programa Nacional de Becas y los cursos consignados a través del beneficio de disminución de impuestos.

El Programa Nacional de Becas, que llegó a tener más de cincuenta mil beneficiarios en 1979 (10), pero que con posterioridad ha disminuido en aproximadamente un quinto de esa cifra, opera sobre la base de licitaciones públicas de cursos. Los cursos se dictan a sugerencias de los alcaldes, o de los mismos organismos que los imparten sin que existan

explicitantes políticas nacionales claras y definidas al respecto. Los beneficiarios son en general miembros de las organizaciones de base vinculadas al gobierno (Centros de Madres, Secretaría Nacional de la Juventud); trabajadores de los programas de absorción de cesantía; y menores en situación irregular. En parte estos cursos están orientados a reducir el gasto familiar (confección de ropa para niños, huertos caseros, etc.) más que a crear unidades productivas.

Las empresas que cancelan impuestos de primera categoría pueden deducir de sus pagos hasta un monto equivalente al 1% de la planilla de sueldos para la formación y perfeccionamiento de su personal. Para ello pueden seguir cualquier curso que sea registrado en el SENCE. Esta legislación ha servido en gran medida sólo al personal de mayor rango de las empresas beneficiadas quienes asisten a cursos de carácter gerencial de muy alto costo sólo en algunas empresas de gran tamaño; los organismos de capacitación participan en el diagnóstico de necesidades que posteriormente preparan cursos ad hoc.

La legislación chilena también contempla el sistema de aprendizaje, permitiendo al empleador contratar aprendices con un salario reducido durante el período de formación. La

NOTAS

- (1) Algunos de los antecedentes y cifras expuestos en este párrafo han sido extractados de Latorre, C. L. y Yonemura, A. "Formation of urban low income class and education: Chile and Mexico". Tokio, Japan, Institute of Development Economics. J.R.P. Series N. 59, March 1986.
- (2) ODEPLAN-Universidad Católica de Chile. "Mapa de la extrema pobreza". Santiago, Chile: 1972.
- (3) CEPAL, "Balance preliminar de la economía latinoamericana, Santiago, Diciembre de 1983.
- (4) La educación formal incluye los establecimientos de niveles básico, medio o superior que están reconocidos como tales por el Ministerio de Educación. El resto de los cursos, académicos o centros de capacitación de mano de obra constituyen la educación no-formal.
- (5) Lavados, I. Le Maitre María José; "La Educación Superior en Chile, riesgos y oportunidades en los 80", Santiago, CPU, 1985.
- (6) Los costos pueden no parecer tan altos en términos internacionales, pero el problema estriba en que en Chile un obrero del Plan del Empleo Mínimo gana US\$ 20 mensuales y un maestro primario o un obrero especializado tiene un salario de US\$ 100.
- (7) La educación formal en Chile está organizada en ocho grados de Educación General Básica después de los cuales siguen cuatro años de Educación Media. Existen dos modalidades para la educación media: la Científico-Humanista y la Técnico-Profesional. La legislación vigente establece que los dos primeros años de la educación media son comunes.
- (8) Echeverría, R. "Estadísticas de matrícula y población. 1935-1982". Santiago, PIIE Estudios 1982.

- (9) Magendzo, A.; González, L.E. "Análisis de la educación media técnico-profesional". Santiago, PIIE Estudios, 1982.
- (10) González, L.E.; Latorre, C.L. Posibilidades de la Capacitación y la organización para los Trabajadores por Cuenta Propia.
- (11) Para que una persona esté desempleada deben conjugarse cuatro elementos: la condición de estar sin trabajo y supuestamente estar en los límites de edad legal para trabajar; tener la necesidad de trabajar; mostrar una actitud de interés por incorporarse a la actividad laboral; lo cual se refleja en la búsqueda de trabajo.

Las cifras de desempleo incluyen a las personas con alguna experiencia laboral previa que buscan trabajo (cesantes) y a quienes buscan trabajo por primera vez. Es lo que se denomina desempleo abierto. Pero no se incluye a quienes desean aumentar su jornada de trabajo y no pueden hacerlo (desempleo invisible o subempleo horario). Tampoco se considera la baja utilización de las capacidades y potencialidades de los trabajadores que se produce por la falta de oportunidades laborales (subempleo técnico).

Para tener una visión más completa del concepto de desempleo, recomendamos consultar los trabajos de OIT sobre el tema, en especial:

Standin Guy. La Noción de desempleo voluntario ILO, Revista Internacinal del Trabajo, Vol 101, enero-marzo de 1983.

Standing Guy. The Notion of structural unemployment ILO, International Labor Review, Vol 122, N. 2, march-april, 1983, p. 137.

Standing Guy. The notion of technological unemployment ILO, International Labor Review, Vol. 123, march-april 1984, p. 127.

De ellos se han extractado algunas de las definiciones utilizadas.

- (12) Tockman, V. Reactivación con transformación, el efecto en el empleo. En Colección Estudios CIEPLAN, N. 14, Santiago, Septiembre 1984, pp. 105-127.
- (13) Müller, P. Análisis de la desocupación chilena, en Colección Estudios CIEPLAN, N. 14, p. 29.
- (14) Para efectos de las estadísticas se consideran ocupados a los que han trabajado más de un cierto número de horas, que puede ser hasta 8 en la semana en que se realiza la encuesta de empleo.
- (15) Insunza, J.; Solari, R.; Valenzuela, E. Op. cit.
- (16) Gili e Illanes, M. El empleo juvenil, Santiago, Ministerio del trabajo. Citado por Kirsh, Henry. La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina, Revista de la CEPAL, dic. 1983, p. 119.
- (17) Livacic, E. "Ocupación, desocupación de los jóvenes de 14 a 19 años en el Gran Santiago. 1965-1981". Tesis de Grado. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile, 1983.
- (18) Latorre, C.L.; González, L.E. "Posibilidades de capacitación, organización de los trabajadores del sector informal de la economía". Santiago, PIIIE, Informe de Investigación, 1981.
- (19) Ibid.
- (20) Véase CIEPLAN Colección Estudios N. 14. Desocupación chilena. Diagnóstico impacto social y soluciones. Santiago, noviembre de 1984 y PREALC. Después de la Crisis Lecciones y perspectivas. Santiago, octubre de 1984.